

TD
33



**DERECHO COOPERATIVO ARGENTINO:
FUNDAMENTOS DE SU AUTONOMIA**



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

TESIS DEL ABOGADO ALFREDO ROQUE CORVALAN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR	
Fac. C. Jur. Biblioteca	
Nº Ord	46.345
Ubic	334.2 (043)
COA	

JULIO DE 1984

347.7

"DERECHO COOPERATIVO ARGENTINO: FUNDAMENTOS DE SU AUTONOMIA"



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Tesis del abogado Alfredo Roque Corvalán
Curso: Doctorado en Jurisprudencia
Universidad del Salvador
Facultad de Ciencias Jurídicas
Resolución Decanal Nro. 206/83
Fecha: 16 de julio de 1984

(Dom.: Marcelo T. de Alvear 952, p.8, "C", Cap. Fed. Tel. 393-3921
Tel. 795-171)

Nota: Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Todos los derechos reservados.



INDICE GENERAL

CAPITULO I

INTRODUCCION

1. Nociones preliminares.....	1
2. El método.....	2
3. El Derecho Cooperativo.....	4
3.1. Concepto.....	4
3.2. Fuentes del Derecho Cooperativo.....	6
3.2.1. Sentido de la expresión.....	6
3.2.2. La ley.....	7
3.2.3. El Código de Comercio de 1869.....	11
3.2.4. La Ley 11.388.....	13
3.2.5. La Ley 19.219.....	14
3.2.6. La Ley 19.550.....	15
3.2.7. La Ley 20.337.....	15
3.2.8. Creación de la Secretaria de Estado de Acción Cooperativa.....	20
3.2.9. La doctrina.....	23
3.2.10 La costumbre.....	24
3.2.11. La jurisprudencia.....	25
4. La autonomía de una rama del Derecho.....	26

CAPITULO II

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS EN LA DOCTRINA Y LA LEGISLACION

1. Los principios universales de la cooperación.....	29
1.2. Su importancia.....	29
1.3. Concepto.....	29
1.4. Enunciación.....	31
1.5. Libre acceso y adhesión voluntaria.....	31
1.5.1. En los Estatutos de Rochdale.....	31
1.5.2. En la formulación de la ACI de 1937.....	34
1.5.3. En la reformulación de la ACI de 1966.....	36
1.5.4. Recepción del principio de "libre acceso y a- dhesión voluntaria" en la legislación nacional.....	43
1.6. Organización democrática.....	47
1.6.1. En los Estatutos de Rochdale.....	47
1.6.2. En la formulación de la ACI de 1937.....	48
1.6.3. Los principios cooperativos en el coloquio de la Universidad de Lieja (Bélgica).....	49
1.6.4. El principio de "organización democrática" en la reformulación de la ACI de 1966.....	52
1.6.5. Recepción del principio de "organización demo- crática" en la legislación nacional.....	55
1.7. Principio de "limitación del interés al capital".	57
1.7.1. En los Estatutos de Rochdale.....	57
1.7.2. En la formulación de la ACI de 1937.....	60
1.7.3. En la reformulación de la ACI de 1966.....	61
1.7.4. Recepción del principio de "limitación del inte- rés al capital" en la legislación nacional.....	62

1.8. Distribución de excedentes entre los asociados en proporción a sus operaciones y/o destino de excedentes a finalidades comunes.....	64
1.8.1. En los Estatutos de Rochdale.....	64
1.8.2. En la formulación de la ACI de 1937.....	67
1.8.3. En la reformulación de la ACI de 1966.....	68
1.8.4. Recepción del principio del "retorno cooperativo" en la legislación nacional.....	70
1.9. Principio de "promoción de la educación".....	75
1.9.1. En los Estatutos de Rochdale.....	75
1.9.2. En las formulaciones de la ACI de 1937.....	76
1.9.3. En la reformulación de la ACI de 1966.....	77
1.9.4. Recepción del principio de "promoción de la educación" en la legislación nacional.....	78
1.10. Principio de "integración cooperativa".....	80
1.10.1. Concepto.....	80
1.10.2. En los Estatutos de Rochdale.....	82
1.10.3. En las formulaciones de la ACI de 1937.....	83
1.10.4. En la reformulación de la ACI de 1966.....	83
1.10.5. Recepción del principio de "integración cooperativa" en la legislación nacional.....	85
1.11. Otras normas que han sido tradicionalmente consideradas como principios cooperativos o siguen tenidas como tal por una parte de la doctrina.....	88
1.11.1. Introducción.....	88
1.11.2. Neutralidad política y religiosa.....	89
1.11.3. Venta al contado.....	89
1.11.4. Pureza y exactitud en el peso y medidas de los artículos.....	92
1.11.5. Realización de operaciones exclusivamente con asociados.....	94
1.11.6. Venta a precio corriente o de mercadeo.....	101
1.11.7. Destino desinteresado de los sobrantes patrimoniales en caso de disolución de la cooperativa.....	102
1.11.8. Expansión constante.....	105
1.11.9. Coincidencia con los intereses generales de la comunidad.....	106

CAPITULO III

BASES DE LA AUTONOMIA CIENTIFICA

DEL DERECHO COOPERATIVO

1. Introducción.....	109
2. La cooperativa.....	109
2.1. Concepto.....	109
2.2. Naturaleza jurídica de la cooperativa.....	122
2.3. Desarrollo jurídico conceptual de la cooperativa en el Derecho Patrio.....	138
2.4. El problema de la naturaleza jurídica de la cooperativa después de la sanción de las leyes 19.550 y 20.337.....	143
3. La empresa cooperativa.....	153
4. El acto cooperativo.....	159
4.1. Concepto y desarrollo doctrinario.....	159
4.2. Teoría del acto cooperativo.....	180
4.4. El acto cooperativo en el Derecho Positivo Argentino.....	190



4.4.1. Análisis normativo del acto cooperativo en la Ley 20.337.....	191
4.4.2. Efectos jurídicos del acto cooperativo.....	193
4.4.3. La jurisprudencia y el acto cooperativo.....	195

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

1. La autonomía del Derecho Cooperativo Argentino....	201
1.1. El Derecho Cooperativo Argentino y los principios que rigen la unidad interior de la ciencia.....	202
1.2. Nuestra tesis.....	204

<u>Bibliografía</u>	207
	215



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

- (1) Jorge Hooper, "El Derecho y la Realidad Social", Ediciones Espinoza, Bs. As., 1953, p. 17.
- (2) Conf. Alfredo Roque Corvalán, "La Autonomía del Derecho Cooperativo", LL. Año XLVIII, No. 125 (13-5-54), p. 6.
- (3) Conf. George Jacob Holyoake, "Historia de los Movimientos de Rochdale", Intercoop Editors Coop., Ltd., Ph. 1975, pp. 12 y 13.

CAPITULO I

INTRODUCCION

1. Nociones preliminares

El derecho es un sistema de normas que regula coactivamente conductas humanas, tutela valores y tiende a la coexistencia. (1)

El Derecho Cooperativo, desde sus albores con la sanción en Inglaterra de la primera Ley de Cooperativas en 1952 (2), ha venido constituyendo un sistema de normas jurídicas que tutela valores considerados fundamentales para lograr y afianzar la coexistencia entre los hombres en base a la justicia social.

Así, la cooperación y la solidaridad han merecido la tutela del Derecho Cooperativo como valores superiores de una escala axiológica - presidida por la Justicia - capaces de transformar un orden económico - social individualista y competitivo por otro solidario y cooperativo.

En síntesis, el Derecho Cooperativo está llamado a normativizar los principios que dan sustento al sistema cooperativo como instrumento fundamental para lograr - en paz - un orden económico - social más justo, fundado principalmente en el trabajo del hombre.

Sabemos que el cooperativismo nació para dar una solución práctica tendiente a morigerar la explotación de los trabajadores por los poseedores del capital. (3)

(1) Jorge Kipper, "El Derecho y la Realidad Social", Lerner Editores Asociados, Bs. As., 1983, p. 27.

(2) Conf.: Alfredo Roque Corvalán, "La Autonomía del Derecho Cooperativo", LL. Año XLVIII, Nro. 126 (10-5-84), p. 3.

(3) Conf.: Georges Jacob Holyoake, "Historia de los Pioneros de Rochdale", Intercoop Editora Coop. Ltda., Bs. As. 1975, ps. 12 y 13.

La obra del legislador vendría después para aprisionar en supuestos jurídicos una realidad social dinámica y cambiante. (4)

Desde que veinte y ocho tejedores fundaron la cooperativa de los Pioneros de Rochdale, en el condado de Lancashire, Inglaterra, en 1834, considerada como punto de partida del cooperativismo moderno (5), hasta nuestros días, los datos de la realidad nos muestran al cooperativismo como uno de los movimientos sociales de mayor significación en el mundo y en nuestro país.

Basta decir que, en 1981, existían en la Argentina 5.426 cooperativas matriculadas que agrupaban a 9.136.694 asociados; cifra equivalente a un tercio de la población. (6)

En el orden mundial la cifra superaría los 500 millones de personas, según datos del año 1977. (7)

Por ello se ha sostenido con fundamento (8) que, en nuestro mundo económico y social, el cooperativismo ha dejado de ser simple complemento o dato corrector del sistema capitalista para constituirse en componente decisivo de un nuevo sistema económico.

Siendo así, no podíamos dejar de sumar nuestro modesto aporte - concretado en este trabajo de tesis - tendiente a fundamentar la autonomía científica del Derecho Cooperativo Argentino.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

(4) Conf.: Roberto H. Brebía, "Hechos y Actos Jurídicos", editorial Astrea, Bs. As., 1981, ps. 1 y 2.

(5) Alicia Kaplan de Drimer y Bernardo Drimer, "Manual de Cooperativas, Intercoop Coop. Ltda., Bs. As., 1977, p. 50.

(6) Conf.: Congreso Argentino de la Cooperación, "Documento Final - Presencia del Cooperativismo en la Realidad Argentina", punto "C": Importancia Global y Relativa del Cooperativismo, editado por Comisión Organizadora del Congreso Argentino de la Cooperación (CUOPERA y CONINAGRO), Bs. As., 1983, p. s/n.

(7) Conf.: Alexander F. Laidlaw, "Las Cooperativas en el Año 2.000", Intercoop. Editora Coop. Ltda., Bs. As., 1981, p. 19.

(8) Del Mensaje que acompaña a la Ley 52/1974 General de Cooperativas de España, del 19-12-74-, editorial Segura, Madrid, España, 1983, p. 3.

2. El método

El método a utilizar para la investigación del derecho cooperativo debe ser el adecuado a su particular contenido. Consideramos no adecuado el puro método conceptualista que en aras de abstracciones nos aleje de la realidad social que nutre a las ciencias jurídicas como también la aplicación estricta de una jurisprudencia de intereses que ignore la necesaria labor teórica en la construcción jurídica.(9) Creemos que debemos conjugar ambos métodos realizando un análisis de las fuentes del derecho cooperativo argentino, deteniéndonos en los principios universales del cooperativismo consagrados por la doctrina, la práctica cooperativa y - finalmente- en las instituciones que fundamentan su autonomía.

En nuestra tarea, hemos de tener presente que el jurista no interpreta la ley, sino que interpreta la conducta humana mediante la ley. Es decir que el jurista "analiza conductas, que han sido valorizadas de acuerdo a una escala vigente en una circunstancia histórica dada, pero siempre con el valor justicia como bien supremo en la cúspide de su pensamiento" (10).

Asimismo, debemos aclarar que en la primera parte de nuestro trabajo (cap. I y cap. II) utilizaremos indistintamente los vocablos sociedad, asociación, entidad o simplemente cooperativa para referirnos a los antecedentes doctrinarios y legislativos sin que ello implique una toma de posición respecto de su particular naturaleza jurídica. Este tema será materia de los últimos capítulos (cap. III y cap. IV).

(9) Conf.: Ernesto Clemente Wayar, "Tratado de la Mora", editorial ^{Apaco} Astrea, Bs. As., 1981, ps. 1 y 2.

(10) Juan Carlos Carr, "El Acto Cooperativo y los Valores Cooperativos", LL. T 1981 - A Sec. Doctrina p. 864 "Este sistema, encauzado por la nueva visión del hombre dada por la filosofía, introduce la teoría de los valores en el análisis de la ciencia jurídica, sobre la conducta humana. El yo, el hombre, se presenta como algo que hace, piensa, quiere, percibe, imagina, valora y decide. La persona existe en sus actos y estos actos están dirigidos por valoraciones" (op. cit. p. 864).

3. El Derecho Cooperativo

3.1. Concepto

El derecho cooperativo es una de las consecuencias históricas de la existencia del cooperativismo como realidad socioeconómica. Nace de circunstancias históricas que han llevado a los hombres a relacionarse, unidos en cooperación, para procurarse un orden económico más justo y equitativo. La historia del cooperativismo, sus contingencias, sus vicisitudes, dieron los primeros elementos al análisis jurídico.

Las reglas esenciales de las instituciones cooperativas son anteriores a todas las legislaciones en materia de cooperación. "En Gran Bretaña - dice la OIT - se sabe que los trabajadores de Woolwich y de Chatham poseían su propio molino de harina en 1760, pero la ley no estableció sino 92 años después, en 1852, el derecho de propiedad colectiva, concediendo a las cooperativas personalidad jurídica (que no poseían las trescientos y pico cooperativas que existían en 1830)" (11).

Se ha dicho que desde que el Parlamento Británico aprobó la primera ley de cooperativas, en 1852, se estima aproximadamente en 5.000 las leyes que rigen la actividad cooperativa en todo el mundo. (12)

Con el transcurso de los años, la vigencia práctica de los principios universales del cooperativismo dió a la estructura de las cooperativas características propias y diferenciales.

(11) Oficina Internacional del Trabajo (OIT), "Las Cooperativas", editado por la OIT, Ginebra, 1956, p. 10.

(12) Luis Felipe Rodríguez Vildazora, "La Doctrina Cooperativa como fuente de Derecho Cooperativo", ponencia publ. en vol. del "Primer Congreso Continental de Derecho Cooperativo", Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, nov. 1969, p. 172.



Tales características le otorgan a la cooperativa singularidad jurídica y fundamentan el considerar al derecho cooperativo como un derecho especial dentro del ordenamiento jurídico.

Al alemán Otto Gierke se le adjudica haber empleado por primera vez la expresión "Derecho Cooperativo" y haber escrito un libro con ese nombre en 1867. (13).

Paulatinamente, los juristas de la cooperación fueron desarrollando y sistematizando los institutos propios y diferenciales de esta nueva rama de las ciencias jurídicas. La trama normativa cooperativa fue dando cuenta de hechos sociales que desbordaban y hacían insuficiente los cánones del derecho común.

Se ha sostenido que el derecho cooperativo está constituido por el conjunto de normas legales que regulan las relaciones jurídicas derivadas de las actividades de la cooperativa. (14)

También se definió nuestro derecho como "el conjunto de principios y reglas que fijan los deberes y garantizan las facultades de la organización cooperativa en su régimen interno y en sus relaciones con el Estado y la comunidad para realizar un fin social de justicia distributiva y democracia económica" (15).

En otros trabajos se lo conceptualiza como "el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre las personas intervinientes en los actos cooperativos o las actividades resultantes de la economía de servicios que realizan las asociaciones cooperativas en trabajo social" (16).

Por nuestra parte, opinamos que no importa definir al derecho cooperativo tanto como elaborar una teoría general del acto cooperativo que delimite sus contornos y precise sus contenidos y efectos jurídicos.

(13) Antonio Salinas Puentes, "Derecho Cooperativo - Doctrina, Jurisprudencia, Codificación", editorial Cooperativismo, México, 1954, p. 27.

(14) Luis Felipe Rodríguez Vildazora, ob. cit. p. 172.

(15) Antonio Salinas Puente, ob. cit. p. 1.

(16) Enrique José Gasparini, "Autonomía del Derecho Cooperativo - Su Codificación", en Rev. del Inst. de Estudios Cooperativos de la Fac. de Ciencias Económicas de la Univ. Nac. de La Plata, Nro. 28, año 1970, La Plata, p. 40.

Congruentes con tal posición, sostenemos que el derecho cooperativo es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan los actos cooperativos y sus consecuencias jurídicas. (17).

3. 2. Fuentes del Derecho Cooperativo

3.2.1. Sentido de la expresión

El derecho nace con la vida social, deriva de los hechos, pero las reglas jurídicas que lo constituyen se establecen o se crean de diferentes modos. En el concepto amplio de la palabra, se llaman fuentes del derecho los modos cómo se establecen o se crean las reglas jurídicas. (18).

La expresión suele usarse en diversos sentidos. Desde un punto de vista filosófico, significa la esencia suprema de la idea del Derecho (Ej.: cuando el Preamble de la Constitución Nacional invoca "la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia"). Desde una óptica histórica, se alude a los antecedentes patrios o extranjeros que han podido servir de base a un determinado orden jurídico. Finalmente, la expresión fuentes del derecho se aplica a las normas o preceptos de derecho positivo, del cual nacen derechos y obligaciones para las personas. (19). En este trabajo utilizaremos la expresión en sus dos últimos significados. Otros autores han distinguido las fuentes en "inmediatas" y "mediatas". Realmente sólo las primeras revisten carácter normativo y son: costumbre y ley. Las segundas son: usos administrativos, jurisprudencia de los tribunales y las elaboraciones doctrinarias. Desde otro aspecto, suelen distinguirse las fuentes del derecho en "materiales" y "formales"; refiriéndose las primeras a las autoridades de que provienen las normas y, en tal concepto, el Estado vendría a ser la más alta fuente material del derecho. Las segundas son todas las expresiones reguladoras de conducta jurídica, sean rigurosamente normativas o meramente técnicas y complementarias. (20).

(18) Raymundo M. Salvat, "Tratado de Derecho Civil Argentino", "Parte General", Tipográfica Editora Argentina, 1958, Bs. As., T. I, ps. 15 y 16.

(19) Conf.: Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil" - "Parte General", editorial Perrot, 1980, Bs. As., p. 55

(20) Conf.: Arturo Orgaz, "Introducción Enciclopédica al Derecho y las Ciencias Sociales", editorial Assandri, 1955, Córdoba, p. 61.

(17) Conf.: Juan Carlos Carr, "Acto Cooperativo", ed. Fed.

Por nuestra parte sabemos que las relaciones sociales no son meramente estáticas sino por el contrario dinámicas y cambiantes. Por tanto, siendo las relaciones sociales el material ofrecido a la regulación jurídica se desprende, obviamente, que el Derecho debe plasmarse sobre esa realidad, amoldándose y adecuándose a ella en función de valores. Eso explica la constante evolución de las instituciones jurídicas, que a lo largo de la historia van compaginándose con las cambiantes formas de convivencia que se manifiestan en el seno de las comunidades. Surgen, así, las normas jurídicas que - de carácter consuetudinario, legislativo o jurisprudencial - están encaminadas a la regulación armónica de esas nuevas formas de relación y convivencia. Asegurándose, así, la realización de los valores de alteridad que la comunidad estima de más jerarquía y cuya cima la constituye la justicia. (21).

Respecto del derecho cooperativo se ha sostenido que sus fuentes deben ser: a) la ley, b) la doctrina cooperativa, c) la costumbre y d) la jurisprudencia; en ese orden. Asimismo, se reconoció que lo normal sería ubicar la doctrina en los últimos lugares; pero, por lo menos en la época actual, es necesario esta prioridad por cuanto es fundamental darle al nuevo Derecho Cooperativo instituciones jurídicas propias, que no puede ser tomadas necesariamente del Derecho Común. (22).

3.2.2. La Ley

La ley es para la ciencia jurídica, la norma jurídica general en cuanto originada en la legislación y de aquí que los autores suelen emplear, por brevedad, la palabra ley para designar tanto a la norma como a la fuente de la que emerge, es decir, la legislación. (23). Es decir que la ley es la norma general establecida mediante la palabra por el órgano competente (legislador). (24).

(21) Dante Osvaldo Cracogna, "El Acto Cooperativo", Rev. del Inst. de Est. Coop., Univ. Nac. de La Plata, Nro. 28, 1970, ps. 49 y 50.

(22) Carlos Torres y Torres Lara, "Principios Generales de Legislación Cooperativa en los países del Área Bolivariana",

pon. publ. en "Primer Congreso Cont. de Der. Coop.", ed. cit.

(23) Enrique R. Aftalión, Fernando García Olano y José Vilanova, "Introducción al Derecho", edic. Coop. de Der. y Ciencias Sociales, Bs. As., 1972, p. 103.

(24) Ibid.

En este sentido, recordemos que la primera legislación cooperativa conocida en el orden mundial, la "The Industrial and Provident Societies Act" fue votada por el Parlamento Británico en 1852 y sigue constituyendo la legislación prevaleciente en ese país, hasta nuestros días. Cabe la misma reflexión respecto de la ley austríaca de 1873 y la ley alemana de 1889. Esta última vigente aún en la República Federal de Alemania. (25).

En cuanto a la República Democrática Alemana, la legislación cooperativa fue derogada en 1950 y las cooperativas se rigen exclusivamente por sus estatutos, al igual que en Dinamarca, uno de los pocos países que carecen todavía de legislación cooperativa. (26).

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en relación a la legislación cooperativa, distingue cuatro grupos de países (27):

- a) aquellos en que el movimiento cooperativo se ha visto concretizado en la realidad, seguido a más o menos largo plazo de una legislación general específica;
- b) aquellos que, en las mismas condiciones, no adoptaron sino una legislación sectorial o por Estados cuando se trata de federaciones o confederaciones;
- c) aquellos otros en los cuales la promulgación de una legislación ha dado como resultado casi inmediato la creación de cooperativas, o ha seguido inmediatamente la formación de las primeras cooperativas;

(25) Publ. Oficina Internacional del Trabajo (OIT), "Información Cooperativas" - "Complemento Nro. 2", "Cronología Cooperativa", Ginebra, Suiza, 1973, p. 58.

(26) Ibid.

(27) Ibid.



d) finalmente, aquellos en donde la legislación ha precedido, por más o menos tiempo, el nacimiento efectivo del movimiento cooperativo.

En la inmensa mayoría de los países, el nacimiento del movimiento cooperativo ha precedido, en forma más o menos extendida, la promulgación de la legislación (84 países); en unos treinta países uno y otro de estos factores aparecen simultáneamente; queda por último una minoría de países (en Africa y Latinoamérica principalmente) en los cuales la legislación ha precedido a las cooperativas (en 13 países) y donde, en nueve de ellos, dicha legislación resultó sin efectos. (28).

La conclusión que se impone no hace sin duda sino confirmar un hecho evidente: la legislación no es en sí misma/motor, y el impulso gubernamental, aunque a veces sea indispensable, no puede substituirse a la actividad y a la iniciativa privada.

El panorama actual de la legislación extranjera nos muestra la existencia de países de gran desarrollo cooperativo poseedores de leyes modernas y completas sobre la materia (tales como Suecia con su ley de 1951 y Finlandia con su ley de 1954); en cambio, otros países que también tienen un notable desarrollo cooperativo, como Noruega y Dinamarca, carecen de una ley sobre cooperativas, sólo aluden circunstancialmente a ellas dentro de otras disposiciones legales y no manifiestan hasta el presente la necesidad de sancionar una legislación específica. (29).

Por otra parte, se ha observado con razón que, en los países de mayor tradición cooperativa, las normas de organización y funcionamiento de las entidades cooperativas sur-

(28) Ibid.

(29) Alicia Kaplan de Drimer y Bernardo Drimer, "Las Cooperativas", Intercoop Editora Coop. Ltda., Bs. As. 1981, p. 473.

gen y se aplican espontáneamente, en base a las experiencias realizadas; luego las federaciones u otras organizaciones de cooperativas adoptan tales normas fundamentales en los estatutos - tipo que ofrecen a las cooperativas de primer grado; y sólo más tarde, esas normas son consagradas en forma más o menos completa en la legislación.

Por el contrario, en los países de menor desarrollo cooperativo, la legislación suele anticiparse a la práctica del cooperativismo y adopta a menudo un detallado ordenamiento legal, que toma como modelo las normas aplicadas en los países en donde las cooperativas se hallan más desarrolladas, precisamente con el objeto de facilitar la difusión de este tipo de entidades. (30).

Por último, es importante señalar que es cada vez más frecuente la incorporación a la normativa constitucional de disposiciones tendientes a la promoción del cooperativismo. (31).

En el derecho patrio podemos distinguir los siguientes hitos en la evolución de la legislación cooperativa: a) Código del Comercio de 1889; b) Ley 11.388; c) Ley 19.219; d) Ley 19.550; e) Ley 20.337 y e) Creación de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa (Decretos Nac. Nro. 15 (10-12-83) y Nro. 345 (30-12-83) y Resolución Conjunta del Min. de Econ. y Sec. Gral. de la Presidencia de la N. Nro. 9 (30-3-84).

DEL SALVADOR

(30) Ibid.

(31) "La creciente importancia que se atribuye a las organizaciones cooperativas como medio de asegurar el bienestar general y el adecuado desarrollo económico - social, determina asimismo la sanción cada vez más frecuente de disposiciones constitucionales, que establecen el reconocimiento y/o promoción por parte del Estado de este tipo de organizaciones". "Recordemos que la primera constitución que adoptó una disposición en ese sentido fue el cantón de Zurich (Suiza) en 1869..." "...en la actualidad contienen disposiciones en materia de cooperativas, tanto las constituciones de diversos países de economía predominantemente liberal (Italia, Suiza, varios países centro y sudamericanos, etc.), como las constituciones de países de economía predominantemente colectivizada (URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, etc.); las primeras establecen por lo común el deber del Estado de fomentar la organización y funcionamiento de las entidades cooperativas; las últimas suelen reconocer la existencia, junto al sector público, de otros sectores de economía privada y de economía cooperativa" (Alicia Kaplan de Drimer y Bernardo Drimer. *op. cit.* p. 171).

3.2.3. El Código de Comercio de 1889

El Código de Comercio que rige en la República, fue sancionado en 1889. Con anterioridad, las relaciones jurídicas emergentes del comercio, se regían por el código que fué primitivamente del Estado de Buenos Aires (promulgado el 8 de octubre de 1859) y que entró a regir para toda la Nación el 10 de septiembre de 1862. Este código rigió como ley nacional hasta octubre de 1889 en que se sancionó el vigente.

En el código anterior a 1889 no se registra ninguna disposición sobre sociedades cooperativas. El legislador que dió en 1859 un código para el Estado de Buenos Aires, pudo ignorar esta forma de asociación, cuyo desarrollo estaba en el vacilante período inicial en los países europeos que podían ofrecerse como fuente de información legislativa. Pero en los años que van desde 1862, en que se adoptó el Código de Buenos Aires como ley nacional, hasta 1889, en que el Congreso Nacional sancionó el código vigente, el movimiento de legislación sobre sociedades en general y particularmente sobre sociedades cooperativas, fue vasto y en algunos países, determinado por el movimiento popular de las instituciones. (32).

No obstante lo dicho, la cooperación era casi desconocida en el país y la Comisión Reformadora del Código de Comercio pudo en 1889, ateniéndose a esta circunstancia, omitir una legislación específica en la materia.

Testimoniando ese escaso desarrollo cooperativo, señalaba el doctor Domingo Borea, en su estudio sobre "Mutualidad y el Cooperativismo en la República Argentina (3er. Censo Nacional en 1914, ps. 110 y sgtes.) la existencia de una cooperativa "urbana" en 1884 (Soc. Coop. de Almacenes), dos en 1887 (Coop. Telefónica y el Banco Popular Cooperativo), una "rural" en 1885 (Compañía Mercantil del Chubut) anteriores al Código de Comercio. (33).

(32) Federico Rodríguez Gómez, "La Sociedad Cooperativa", editado por el Instituto para la Educación Económica, Bs. As. 1964, p. 318.

(33) Rodríguez Gómez, ob. cit. p. 321.

"Las sociedades cooperativas han empezado a surgir entre nosotros - dice en su informe la comisión redactora del Código de Comercio - prometiendo el mayor beneficio de sus condiciones naturales por un mayor desarrollo en el futuro. Hemos debido, pues, legalizar la existencia y funcionamiento de tales sociedades, introduciendo un capítulo relativo a ellas" (34).

Consecuentemente se incorporó al nuevo Código de Comercio - que reemplazó al de 1859/62 - el capítulo VI del título III del libro 2do. que comprendía tres artículos (392, 393 y 394), que trataba de las Sociedades Cooperativas.

La ley imponía un mínimo de requisitos, de eficacia virtualmente nula, pues si bien establecía, por ejemplo, que las acciones debían ser nominales, que cada socio no podía tener más de un voto cualquiera fuere el número de las acciones que poseyere, o que, salvo estipulación en contrario, los socios tendrían derecho a salir de la sociedad en las épocas establecidas o al final de cada año social; es evidente que la necesidad de constituirse bajo algunas de las formas sociales previstas en el Cód. de Comercio (art. 392), que podía ser, incluso la colectiva, trastocaba la incipiente tentativa de ordenar la institución conforme con sus principios propios. Sin embargo, la falta de una legislación adecuada no impidió que esforzados cooperativistas lograsen realizaciones magníficas y duraderas al calor de entusiasmos y de convicciones que suplieron la insuficiencia de la ley. (35).

De las normas del Cód. de Comercio de 1889, sólo una puede considerarse expresión genuina de la doctrina cooperativa:

(34)"Informe de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación, que precedió a la sanción de la Ley 11.388 " transcrita, íntegramente, en la obra "La Sociedad Cooperativa" de Rodríguez Gómez (cap. XL, ps. 311 a 394).

(35)Adolfo Pliner, "La Sociedad cooperativa y las formas de empresa", LL. T. 96, Sec. doctrina, p. 749.

la que establecía el principio "un socio, un voto" (art. 394). Pero nada se establecía con respecto a los restantes rasgos fundamentales de las cooperativas (distribución de excedentes, interés limitado al capital, ingreso de socios, etc.) (36).

El Primer Congreso de las Cooperativas Argentinas, realizado en la ciudad de Buenos Aires, en octubre de 1919, ante tal estado de cosas, pudo decir por boca de su presidente, el doctor E. Ruiz Guíñazú, al inaugurar sus sesiones que ".....no tenemos aún la ley orgánica de las cooperativas, destinada a suplir la inicuidad del Código de Comercio, que estatuye la sociedad cooperativa bajo la faz mercantil, sin sospechar siquiera su rol económico - social" (37).

3.2.4. La Ley 11.388

Los abusos a que dió lugar la aplicación de las normas del Cód. de Comercio de 1889 por la creación de "falsas cooperativas" para aprovechar las ventajas otorgadas a estas sociedades, luego de múltiples proyectos llevó a la sanción de la Ley 11.388 en el año 1926, a cuyo amparo se ha desarrollado en el país un vigoroso movimiento cooperativo, aún cuando no se ha logrado la total eliminación de las "falsas cooperativas" en algunas actividades. (38).

La ley 11.388 deroga (art. 11) los artículos 392, 393 y 394 del Código de Comercio y prevé la aplicación supletoria de las prescripciones del mismo sobre sociedades anónimas en : cuanto no sean contrarias al régimen específico que estatuye para las sociedades cooperativas. (39).

Esta primera ley nacional de cooperativas es hija de su tiempo, refleja el contenido de toda una etapa de la vida nacional y encierra el extraordinario valor de representar la exitosa culminación de un importante ciclo de luchas del movimiento cooperativo argentino (40).

(36) Dante Cracogna, "La nueva ley de cooperativas", JA. , Doc. 1974, p. 236.

(37) "informe de la Comisión de Códigos..." en ob. cit. p.323.

(38) Isaac Halperin, "Curso de Derecho Comercial", vol. II, edi. Depalma, Bs. As. 1980, p. 455, ap. 2.

(39) Roberto Parry, "Sociedades Cooperativas", edit. Jurídica Argentina, Bs. As. 1942, p. 149.

(40) Jacobo Lake, "¿Qué pasa con las cooperativas, cuarenta años después de sancionada la ley 11.388?", ediciones Instituto, Rosario, 1966, p. 7.

Uno de los méritos más insignes de la ley 11.388 fue haber receptado íntegramente los principios universales del cooperativismo y haber normado a la cooperativa con tal sencillez y amplitud que posibilitó su multiplicación y adaptación a las más diferentes necesidades de la comunidad nacional. Estos méritos débense, fundamentalmente, a la esclarecida labor de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación compuesta por los doctores Mario Bravo, Leopoldo Melo y Pedro Llanos y a los valiosos antecedentes que ellos supieron tomar en cuenta al elaborar su proyecto, tales como los Congresos Argentinos de la Cooperación de 1919 y 1921, los proyectos del Dr. Juan B. Justo y las obras del Dr. Domingo Borea. (41).

Fue una ley general, comprensiva de todas las clases de cooperativas, a las que se abstuvo de reglamentar especialmente en cada uno de sus tipos; fue calificada - en su momento - como una de las más avanzadas del mundo, mereciendo el caluroso elogio de la doctrina nacional y extranjera. (42).

3.2.5. La Ley 19.219

La Ley 11.388 rigió prácticamente sin modificación alguna hasta septiembre de 1971 en que sancionó la Ley 19.219 por la que se crea un nuevo órgano de aplicación de aquella, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), que vino a sustituir al Registro, Inspección y Fomento de Cooperativas que funcionaba en el Ministerio de Agricultura de la Nación dentro de la Dirección General de Economía Rural y Estadística y a los que le fueron sucediendo con posterioridad según las sucesivas modificaciones de las leyes de ministerios. (43).

(41) Dante Cracogna, "La nueva ley...."JA., Doc. 1974, p.237.

(42) Alfredo A. Althaus, "Tratado de Derecho Cooperativo", Zeus Editora, Rosario, 1977, p. 20.

(43) Dante Cracogna, "La nueva ley...."JA. , Doc. 1974, p. 237.

Esta ley ha sido criticada por avanzar sobre las facultades reservadas a las provincias de conformidad al régimen federal instituido por la Constitución Nacional. (44).

3.2.6. La Ley 19.550

La nueva ley de sociedades comerciales, que comenzó a regir el 22 de octubre de 1972, significó un positivo avance en el derecho societario argentino.

Si bien es cierto que a las cooperativas sólo se las mencionaba específicamente - después de la reforma introducida al art. 10 por la ley 21.257 sobre el régimen de publicidad - en el artículo 372 último párrafo, prescribiendo la aplicación de sus disposiciones a las sociedades cooperativas en cuanto no sean contrarias a su naturaleza, conforme al art. 11 de la ley 11.388, los interrogantes creados fueron serios y múltiples. Ello provocó la necesidad impostergable de reformar la legislación cooperativa vigente, en razón de introducir el mentado art. 372 de la Ley 19.550 - por vía de aplicación subsidiaria - normas ajenas y aún contrarias a la naturaleza peculiar de las cooperativas. (45)

3.2.7. La Ley 20.337

Además de los serios problemas que significó al cooperativismo la sanción de la moderna ley de sociedades comerciales antes citada; también la primera ley de sociedades cooperativas del año 1926, pese a sus comentados aciertos, fue criticada en algunos aspectos. Así, se dijo (46) que por la índole de la institución cooperativa, la ley que la reglamente no debe ser el fragmento de un código - como lo era la Ley 11.388 del Código de Comercio - sino un cuerpo legal autónomo, completo y didáctico. Asimismo se le achacaba fal-

(44) Conf.: Althaus, ob. cit., p. 21.

(45) Dante Cracogna, "Ocho años de vigencia de la Ley de Cooperativas 20.337, Balance y perspectivas", Rev. del Der. Comercial y de las Oblig., editorial Depalma, Nro. 85, febrero 1982, Bs. As., p. 57 "Basta mencionar - acota el autor en la nota 6, p. 57 - a título de ejemplo, la posibilidad de constituir cooperativas con dos socios (art. 1 de la Ley 19.550), y aun la reducción de su número a uno (art. 94, inc. 8 Ley 19.550), que podrían haber sido aplicables a las cooperativas en virtud de la remisión del art. 372"

(46) Jorge del Río, "Sugestiones para una Reforma de la Ley de Cooperativas", en Rev. del Instituto de Est. Coop., Universidad de La Plata, octubre, noviembre, diciembre de 1958, Nro. 2, ps. 42 y 43.

ta de método por cuanto un sólo artículo - el 2 - contaba con 22 incisos, que abarcaban las dos terceras partes del texto legal total; en el se agrupaban, sin clasificación y sin orden, los temas más dispares. Además se consideraba insuficiente como una ley general de cooperativas: existían una serie de aspectos relacionados con el nombre, fines, domicilio, organización, estatutos, derechos y obligaciones de los socios, asambleas, consejo de administración, síndicos, cuentas sociales, balances, memorias, liquidación, etc. que aparecían legislados en forma incompleta. Estas omisiones las resolvía la ley con la disposición del artículo 11 que prevía la aplicación supletoria, antes señalada, sin especificar cuales eran las prescripciones sobre sociedades anónimas aplicables a las cooperativas y cuales eran las contrarias. Aspectos que no resultaban al interprete fácil discernir ya que tanto por su estructura como por sus fines, la sociedad anónima es bien distinta de la cooperativa.

Así las cosas, se hacía impostergable abordar la reforma del régimen vigente en la materia.

A tenor de lo normado por el art. 7 de la Ley 19.219, correspondía al Consejo Consultivo Honorario, creado por la misma, y donde se concretaba la participación institucionalizada del movimiento cooperativo, el tratamiento de los proyectos de reformas al régimen legal de las sociedades cooperativas. Previsión que tendría particular importancia en los tramites que culminaron con la elaboración y sanción de la nueva Ley General de Cooperativas Nro. 20.337. Frente a la situación creada por la sanción de la nueva Ley de Sociedades Comerciales Kro. 19.550, el Consejo Consultivo Honorario se abocó (47) a la consideración de sus posibles consecuencias y decidió constituir un grupo de trabajo - que se integró en 1972, con 2 representantes del Movimiento Cooperativo y 2 directores del INAC, los doctores Arturo Vainstok, Manuel R. Domper, Constantino Beltramo y Dante Cracogna - para la elaboración de un proyecto

(47) "Información suministrada por el Consejo Intercooperativo Argentino (CIA) en sesión plenaria del 5-6-72" en "Regimen Legal de las Cooperativas (Ley 20.337)", Intercoop. editorial Coop. Ltda, con auspicio de CONINAGRO y COOPERA-Cuarta Edición, enero de 1979, p. 10.